

condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Primera, en sentencia de fecha 19 de febrero de 1990, a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio activo y pasivo durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en indultar a don Antonio Cárdenas García de la mitad de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que deje satisfechas las responsabilidades civiles impuestas en sentencia en el plazo de un año desde la publicación del presente Real Decreto y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26854 REAL DECRETO 1333/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don José Antonio Carmona Moreno.

Visto el expediente de indulto de don José Antonio Carmona Moreno, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Audiencia Provincial de Granada, en sentencia de fecha 20 de diciembre de 1985, modificada parcialmente por otras del Tribunal Supremo de fecha 16 de marzo de 1990, a la pena de dos años de prisión menor y multa de 50.000 pesetas, con la accesoria de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; igualmente condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia de 7 de febrero de 1990, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra dictada por la Audiencia Provincial de Granada de fecha 20 de diciembre de 1985, a las penas de tres años de prisión menor y otra de igual cuantía y multa de 30.000 pesetas, con las accesorias legales correspondientes; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en conmutar a don José Antonio Carmona Moreno el resto de las penas privativas de libertad pendiente de cumplimiento por multa de 200.000 pesetas, a condición de que abone la misma en el plazo de seis meses desde la publicación del presente Real Decreto y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26855 REAL DECRETO 1334/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don José Castilla Esquius.

Visto el expediente de indulto de don José Castilla Esquius, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Audiencia Provincial de Gerona, en sentencia de 5 de mayo de 1986, a dos penas de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y multa de 80.000 pesetas, a las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en conmutar a don José Castilla Esquius el resto de las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento por multa de 100.000 pesetas, dejando subsistentes los demás pronunciamientos, a condición de que sea abonada en el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Real Decreto y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26856 REAL DECRETO 1335/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don Antonio de la Cruz Iglesias.

Visto el expediente de indulto de don Antonio de la Cruz Iglesias, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid, en sentencia de 11 de septiembre de 1986, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en conmutar a don Antonio de la Cruz Iglesias el resto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por multa

de 100.000 pesetas, a condición de que la misma sea abonada en el plazo de tres meses desde la publicación del presente Real Decreto y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26857 REAL DECRETO 1336/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don Antonio Guzmán Huerga.

Visto el expediente de indulto de don Antonio Guzmán Huerga, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, en sentencia de 2 de mayo de 1988, a la pena de un mes y un día de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y privación del permiso de conducir por tres meses y un día; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en conmutar a don Antonio Guzmán Huerga la pena de privación del permiso de conducir por la de un mes de dicha retirada, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia y a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26858 REAL DECRETO 1337/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don José Manuel Lema Parapar.

Visto el expediente de indulto de don José Manuel Lema Parapar, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña, en sentencias de 22 de septiembre de 1984, 28 de septiembre de 1984, 28 de enero de 1985, 14 de mayo de 1985, 7 de junio de 1985, 21 de junio de 1985, 25 de junio de 1985, 28 de enero de 1986 y 28 de julio de 1986, a la pena de veintidós años, dos meses y un día de reclusión mayor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en indultar a don José Manuel Lema Parapar un tercio de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26859 REAL DECRETO 1338/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don Juan Miguel Pérez Navarro.

Visto el expediente de indulto de don Juan Miguel Pérez Navarro, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Berja, en sentencia de 14 de mayo de 1983, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, multa de 20.000 pesetas y privación del permiso de conducir por cuatro meses; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en indultar a don Juan Miguel Pérez Navarro de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26860 REAL DECRETO 1339/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don Francisco Antonio Sánchez Rodríguez.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Antonio Sánchez Rodríguez, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por los Juzgados de Instrucción números 1 y 2 de Avilés, en sentencias de 27 de septiembre de 1986 y 25 de octubre del mismo año, a las penas de cinco meses de arresto mayor,

otra de cuatro meses de igual arresto y una multa de 30.000 pesetas, con las accesorias de suspensión de todo cargo público; profesión y oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en indultar a don Francisco Antonio Sánchez Rodríguez del resto de las penas privativas de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26861 REAL DECRETO 1340/1992, de 30 de octubre, por el que se indulta a don Angel María Sola Eraña.

Visto el expediente de indulto de don Angel María Sola Eraña, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Audiencia Provincial de Bilbao, en sentencia de fecha 6 de abril de 1990, a la pena de dos años de prisión menor, con las accesorias legales correspondientes y multa de 2.500.000 pesetas; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 1992.

Vengo en conmutar a don Angel María Sola Eraña el resto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por seis meses de arresto mayor y multa de 200.000 pesetas, a condición de que abone la misma en el plazo de cinco meses desde la publicación del presente Real Decreto y no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARLOS R.

26862 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1992, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Eugenio Antón Ruiz, en nombre de «Gabán, Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid a inscribir una escritura de transformación de una Sociedad anónima en Sociedad de responsabilidad limitada.

En el recurso gubernativo interpuesto por don Eugenio Antón Ruiz, en nombre de «Gabán, Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid a inscribir una escritura de transformación de una Sociedad anónima en Sociedad de responsabilidad limitada.

Hechos

I

El día 3 de junio de 1991, ante el Notario de Alorcón don José Manuel García Collantes, se otorgó escritura pública de transformación de la Sociedad «Gabán, Sociedad Anónima», en Sociedad de responsabilidad limitada, que en lo sucesivo tendrá la denominación de Sociedad limitada, sin modificarse el domicilio ni el objeto social según acuerdo adoptado en la Junta general universal extraordinaria celebrada el día 31 de marzo de 1991 y por el Consejo de Administración en la misma fecha y se registró por los Estatutos sociales cuyo texto figura en la certificación incorporada a la escritura. El capital social que asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, totalmente desembolsado, queda dividido en 2.000 participaciones sociales de 1.000 pesetas de valor nominal, iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos valores, ni denominarse acciones, quedando anulados e inutilizados los títulos representativos de las acciones.

II

Presentada la anterior escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue calificada con la siguiente nota: «El Registrador mercantil que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18.2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada por haber observado el/los siguiente/s defecto/s que impiden su práctica. Defectos subsanables: La cifra del capital social es inferior a la exigida por el art. 25.3, a), del Reglamento de 27 de abril de 1990, sin que conste se haya elevado dentro del plazo del año señalado en la disposición transitoria 3.ª de dicho Reglamento, como se deduce del segundo balance aportado del día anterior al otorgamiento. En el plazo de dos meses a contar de esta fecha se puede interponer

recurso gubernativo de acuerdo con los artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Madrid, 5 de agosto de 1991. El Registrador, firmado, Manuel González-Meneses Robles.»

III

Don Eugenio Antón Ruiz, en representación de «Gabán, Sociedad Limitada», interpuso recurso de reforma contra la anterior calificación.

IV

El Registrador acordó mantener la calificación en todos sus extremos, y alegó: I. En cuanto a la interpretación del artículo 25.3, a) Que junto a la tesis del recurrente, coincidente con la del Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego, se han manifestado otras dos, lo que está originando no pocos problemas: a) Se ha considerado que cuando sea una Sociedad la que se dedique a las actividades reguladas por el Reglamento de Máquinas de Juego y Azar, será necesario que sea anónima o una comanditaria por acciones, al ser las únicas que pueden cumplir el doble requisito de tener un capital de 15.000.000 de pesetas y que sus acciones sean nominativas; b) Otra segunda postura es la opinión del Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego, a través de sus manifestaciones escritas, señalando unas veces que sería posible constituir y registrar sociedades dedicadas a la explotación de máquinas recreativas que no se constituyan como sociedades anónimas; y otras, diciendo de forma rotunda que el requisito del capital mínimo no es necesario para sociedades de responsabilidad limitada, y c) Que de un estudio profundo del tema en cuestión, se ha llegado a las siguientes conclusiones: En primer lugar, hay que reconocer la desafortunada redacción del precepto reglamentario que se está estudiando. Que en cuanto al fondo del tema, hay que estar de acuerdo con la afirmación de que pueden actuar como empresas operadoras, sociedades que no revistan la forma de Sociedad anónima, pero se entiende que en el primer inciso del artículo 25.3, a), se contiene un doble requisito aplicable a todas las sociedades que tengan actividades relacionadas con las máquinas recreativas o de azar: 1.º Tener un capital no inferior a 15.000.000 de pesetas totalmente desembolsado; y 2.º Que los socios sean conocidos. Que en cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, las cuestiones que puede representar la interpretación del texto reglamentario hacen referencia a los extremos siguientes: a) El primero, resuelto afirmativamente, que pueden adoptar la forma de Sociedad de responsabilidad limitada las empresas operadoras; b) El segundo constituye el centro de este recurso, que es si las sociedades de responsabilidad limitada deben cumplir los requisitos antes citados. En estas sociedades los socios siempre son conocidos (pues no hay acciones al portador) y el desembolso del capital social también ha de ser total. En cuanto a la cifra de capital mínimo de 15.000.000 de pesetas, debe cumplirse la exigencia por dichas sociedades, cuando en el preámbulo del Reglamento se dice que con dicho capital se pretende aumentar las garantías de las empresas que se dedican a esas actividades. II. Que en cuanto a la indicación del recurrente de que no existe disposición con rango de ley que otorgue cobertura a dicha obligación reglamentaria, y, por tanto, se vulneran los principios constitucionales reconocidos, hay que observar: 1.º Que se trata de una materia que escapa a la esfera de actuación del Registrador en su calificación; y 2.º Que se considera que el recurrente ha podido acudir a las vías constitucionales o judiciales, como permite el artículo 66 del Reglamento del Registro Mercantil, más que a un recurso gubernativo; 3.º Que se han vertido frecuentes manifestaciones de excesos reglamentarios; 4.º Que, no obstante, a quien corresponda la determinación de la posible ilegalidad del Reglamento de Máquinas de Juego y Azar, es posible que cuente con el apoyo del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, artículo 1.1, y el Real Decreto-ley 2/1987, de 3 de julio, artículo 2, g). III. Que, en el caso que se cuestiona, la adaptación-transformación exigía cumplir, no sólo la normativa de la Sociedad de responsabilidad limitada por aplicación de los artículos 227 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 192 del Reglamento del Registro Mercantil, sino también la de las sociedades dedicadas a juegos recreativos y de azar, por aplicación del artículo 25.3, a), de su Reglamento. IV. Que, en cuanto a lo referente al trato discriminatorio de la Sociedad anónima en relación con otros empresarios del ramo, hay que señalar que por lo que se refiere a las consecuencias patrimoniales del tráfico mercantil del empresario individual, de los artículos 6.º del Código de Comercio y 1.911 del Código Civil se deriva su responsabilidad ilimitada, frente a la limitada al capital social en las sociedades anónima o limitada, razón más que suficiente para que a estas sociedades se les exija una cifra alta de capital, dadas las responsabilidades en que pueden incurrir en el ejercicio de las actividades reguladas por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.

V

El recurrente se alzó contra la anterior resolución, y alegó: Que la exigencia del artículo 25.3 del Reglamento de 27 de abril de 1990 de un capital social de 15.000.000 de pesetas se refiere únicamente